

Conferencia magistral:

El extractivismo agrario en tiempos de crisis del capitalismo

Profesor Henry Veltmeyer

Universidad Autónoma de Zacatecas y Saint Mary's University (Canadá)

El autor describe los rasgos actuales de la cuestión agraria a partir de un recorrido por los enfoques de modernización y desarrollo en la región en el último medio siglo, hasta llegar a lo que él considera como un retorno a los rasgos del capitalismo del siglo XIX, centrado en la extracción de recursos naturales y la exclusión social. De paso, menciona la encrucijada en la que esto coloca a los gobiernos “postneoliberales” como Bolivia, y la respuesta de la sociedad ante la nueva situación.

Recientes transformaciones agrarias y rurales en América Latina



Henry Veltmeyer

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad McMaster

Propongo presentar unas ideas relacionadas con el desarrollo capitalista en la región, es decir, con el desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura, industria y el sector extractivo, y las relaciones sociales, incluidas la lucha de clases y las fuerzas de resistencia, porque cada etapa del desarrollo capitalista conlleva sus conflictos y sus luchas.

Las ideas que presento se relacionan con un proyecto de investigación de muchos colaboradores de una red latinoamericana de estudios críticos del desarrollo. Por ejemplo, tenemos colaboradores en Bolivia, en particular de la UMSA, que publicó con Plural nuestro manual *Tools for change* o *Herramientas para el cambio*, un proyecto creo que financiado por Oxfam.

Mi ponencia no constituye un gran avance en su conocimiento, porque ustedes conocen más del tema ya que están sumergidos en la problemática y la pueden ver de cerca. Sin embargo, quizás mi ponencia puede establecer un marco de referencia para las discusiones y el debate que vamos a tener.

Primero, una constatación obvia es que en Sudamérica la producción agrícola y pecuaria continúa expandiéndose, en particular aquella orientada a la exportación, o sea, en forma de materias primas agrícolas, alimentos o biocombustibles.

El crecimiento de la producción agrícola en la región en los últimos 20 años ha convertido a Sudamérica en uno de los principales productores de alimentos en el mundo. En particular, de caña de azúcar y soya, dos de los principales cultivos para la producción de alimentos y energía (biocombustibles). En 2012, los países

sudamericanos contribuyeron con el 42,8% y 51,7% de la producción mundial de caña de azúcar y soya, respectivamente. Esto solamente es un ejemplo.

El punto problemático es que esto ocurre en medio de una fuerte tendencia de muchos gobiernos de volver a un modelo basado en el extractivismo, lo que implica dependencia de la importación de capital en forma de inversión extranjera directa. Y que también ocurre dentro de un contexto global marcado por el “boom de los *commodities*”, cuya principal causa radica en la demanda china de materias primas.

El impacto de la China en las dinámicas asociadas con el extractivismo y la (re) primarización de las exportaciones se evidencia en el hecho de que este gigante asiático ahora es el mayor inversionista en la región, y que el 95% de sus inversiones está destinado a la extracción de recursos naturales. Es un interés enorme por materias primas si lo comparamos con el 40% de inversión de los Estados Unidos en el mismo rubro.

El auge de la agricultura de exportación está inmerso en procesos productivos que se asemejan a los de la minería y los hidrocarburos; otros dos sectores del capitalismo extractivo en la fase actual del desarrollo capitalista. [Esta agricultura] se caracteriza por un proceso de acumulación de capital en el que la mayor parte de los beneficios están externalizados —se van fuera del país— mientras que los enormes costos están internalizados; se quedan adentro. Esta es una característica del capitalismo en general, pero esto es mucho más problemático con esta forma de capitalismo extractivo. A esta dinámica los académicos denominamos como “agroextractivismo”.

Estos procesos de agroextractivismo ocurren en gobiernos que, como Bolivia y Ecuador, se autodefinen como “progresistas” o de izquierda. Es una situación singular ya que, tradicionalmente, los partidos políticos de izquierda denunciaron el extractivismo y las economías de enclave, que se relacionan con esto.

Sin embargo, el extractivismo de hoy es de un nuevo tipo y difiere en varios aspectos del que practicaban y practican los regímenes neoliberales en la región, bajo el llamado Consenso de Washington. Colombia y México son Estados neoliberales, mientras que a Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela los podemos denominar como Estados postneoliberales. Difieren de los primeros porque hacen énfasis en un desarrollo más inclusivo impulsado por el Estado, con crecimiento económico y reducción de la pobreza extrema.

Pero el nuevo extractivismo con estos atributos conlleva nuevas contradicciones para el sector agropecuario (y para la resistencia a ese modelo). Podemos decir que en ningún otro país esas contradicciones y conflictos son tan agudos como en Bolivia. Los gobiernos boliviano y ecuatoriano se encuentran ante un gran dilema: ¿Cómo promover crecimiento económico en un grado y forma que permitan alcanzar el “desarrollo nacional” o “desarrollo inclusivo”, y a la vez asegurar el “vivir bien”, es decir, la solidaridad social y una relación de armonía con la naturaleza?

Para descifrar o desentrañar este dilema —y las contradicciones que contiene— es pertinente ofrecer algunas consideraciones para la discusión. Para eso propongo reconstruir el análisis de las transformaciones agrarias y rurales que en tiempos anteriores se englobaban como la “cuestión agraria”.

La “nueva geoeconomía” del capital

Los procesos de transformación tienen relación con la “nueva geoeconomía” del capital en la región. Se trata de flujos de capital en forma de inversión extranjera directa (IED) destinados a la adquisición en gran escala de tierra y agua (la gran lucha del siglo XX fue por la tierra, la gran lucha del siglo XXI será por el agua). Es un proceso conocido como “acaparamiento” para la extracción de recursos naturales (vemos acaparamiento de la tierra en Argentina y Brasil). Es la respuesta a la demanda de *commodities* del mercado mundial. La escala de estos flujos de capital es enorme. Hasta 1990, el subcontinente sudamericano era receptor del 12% de las inversiones globales en el sector de minería, pero hoy en día absorbe más del 40%.

Las consecuencias son varias y están relacionadas con algunas de las transformaciones recientes en Bolivia y en otras parte de la región.

Primero, la nueva geoeconomía ha acentuado el carácter de enclave de las economías de la región y, en consecuencia, agravó la tendencia a exportar el producto social en forma primaria y sin valor agregado. En muchos países entre el 85 y 95% del producto social es exportado de forma primaria.

Segundo, [la nueva geoeconomía] ha promovido un modelo de desarrollo orientado a la extracción y despojo de la riqueza nacional, que genera escasos beneficios para los países de la región y muy elevados costos, no sólo para la sociedad y la naturaleza, sino para las economías nacionales.

Se estima que un país que exporta sus recursos naturales recibe, en general, menos del 18% del valor en el mercado mundial de minerales y metales, fuentes de energía (carbohidratos y biocombustibles) y productos agropecuarios. La situación es aún peor en el sector de la gran minería: en Bolivia menos del 4,5% del valor se queda dentro del país. Si añadimos al sector cooperativista llegamos, más o menos, hasta el 10% del producto social. El gobierno saca el 15% del valor total del mercado, que se queda en el país para beneficiar a varios sectores. En México es peor debido a que es un Estado entreguista al capital global. El auditor general de ese país calcula que México recibe sólo 1,2% del valor de los minerales extraídos y exportados. La pregunta es ¿quién se beneficia de ese 98%? ¿a dónde van los beneficios?

Los variados costos del extractivismo

La retórica relevante sobre esto a menudo está en contraposición con los datos. El mensaje del discurso público es que el extractivismo, si no es una bendición, al menos es una “oportunidad económica” que se debe aprovechar. El problema es, como decía antes, que la mayor parte del valor total de las materias primas es expatriado para beneficiar a las compañías multinacionales en forma de tasas de ganancia extraordinarias de entre 35 y 60%. Los grandes operadores en la especulación de los precios de los *commodities* —los *commodity traders*— son los beneficiados: entre 2002 y 2008 cosecharon 25 mil millones de dólares. Compárese esto con lo que reciben los productores y el país que es dueño de la riqueza.

En el discurso político se justifica este “negocio” en el mercado mundial, por la renta (tributación y regalías) que genera y que permite a los gobiernos disponer de ingresos fiscales adicionales para financiar sus inversiones y sus programas sociales. Pero esta justificación no toma en cuenta los altísimos costos sociales, medioambientales y económicos (muchos de ellos no se incluyen en el cálculo de costo-beneficio). Mientras los beneficios son trasladados fuera de los países

productores, los costos sociales y económicos se quedan y en su mayor parte son absorbidos por las comunidades y pobladores del campo, que sufren los impactos negativos del extractivismo.

El extractivismo también tiene costos políticos. Por ejemplo, los acuerdos económicos entre agentes del capital global y gobiernos de la región obligan a estos últimos a adoptar políticas que contradicen su compromiso con el pueblo o su plan soberano de asegurar el vivir bien. Con intereses económicos coincidentes —el trato consiste en más lucro para las transnacionales y más ingresos fiscales para los gobiernos— en muchos casos los gobiernos acaban tomando posición al lado del capital en su relación conflictiva con las comunidades que luchan para sobrevivir y protegerse de los impactos negativos del capitalismo en su forma extractiva.

Por ejemplo, en 2011, Ollanta Humala, con apenas tres meses en el poder y después de un discurso electoral en la cual prometió resguardar a la población y a las comunidades de las actividades extractivas de las mineras transnacionales, ordenó el despliegue de tropas de militares en la región de Cajamarca, en una zona de conflicto cercana a uno de los proyectos mineros más grandes del mundo: minas Conga. Esta acción provocó numerosos muertos y heridos entre los defensores de la naturaleza y del modo de vida de los campesinos de la región.

De forma similar, el régimen postneoliberal de Rafael Correa persigue hasta ahora a los defensores del medioambiente a quienes califica de “radicales” y hasta extremistas y terroristas cuando sus protestas amenazan el proyecto de desarrollo nacional del gobierno ecuatoriano. En este caso, el movimiento indígena acabó rompiendo todos sus lazos con el gobierno porque este traicionó su compromiso con el pueblo y porque, a pesar de la retórica antiimperialista y anticapitalista, favorece al capital y es sumiso a los inversionistas y multinacionales. Es un gran problema político.

Ahora voy al grano con el tema del agroextractivismo y las transformaciones agrarias y rurales en la región.

La cuestión agraria en el pasado inmediato

Quiero poner sobre la mesa algunas consideraciones acerca de la cuestión agraria en el contexto de un desencanto y rechazo del modelo neoliberal durante los años 90 —fue una lucha de comunidades indígenas y campesinas, más que de clases trabajadoras— y los avances del capital y el capitalismo en su forma extractiva en América Latina.

La cuestión agraria en situaciones anteriores —en el siglo XX, por ejemplo— se había formulado en los términos de un proceso de transformación productiva y social provocado por la penetración de capital en la agricultura y del capitalismo en la economía y la sociedad agraria. Las dimensiones sobresalientes de ese proceso fueron las siguientes:

- i) El *desposeimiento de los productores directos* —los agricultores o campesinos— de su propiedad y producción pequeña, por lo tanto, su proletarianización: la conversión del campesinado en un proletariado o clase trabajadora. Es decir, una clase desprovista de sus medios de producción y, por lo tanto, obligada a vender o intercambiar con el capital su capacidad o poder de trabajo a cambio de un salario. Marx llamó a este proceso de proletarianización

ción “acumulación primitiva u originaria”. Ahora los académicos —David Harvey, un autor que estuvo acá hace poco— lo llaman “acumulación por desposeimiento”.

- ii) La *concentración económica* de capital y de la tierra, que sigue hasta ahora.
- iii) La *diferenciación interna* del campesinado. Resulta en la formación de un campesinado pobre y uno de ricos y dueños de grandes extensiones de tierra, con capacidad para convertirse en terratenientes (como en Santa Cruz) o en una clase capitalista rural, es decir, empresarios de un agronegocio.
- iv) La *generación de fuerzas de cambio*: la industrialización, urbanización, modernización y globalización dentro del desarrollo capitalista. La incluyo, aunque no sea una cuestión agraria, sino de desarrollo.
- v) La *modernización de la agricultura*. Todos los países de Latinoamérica ingresan en esto a inicios de los años 90 a través de leyes para la modernización de la agricultura y para la conversión de la tierra en una mercancía (todo el mundo es dueño y tiene título para poder vender y comprar tierra). Esto resulta en la formación de una estructura de producción bifurcada: con un sistema de producción pequeño, orientado a la producción alimentaria para el mercado local; y un sistema con base en el agronegocio, orientado al mercado mundial y bajo un régimen alimentario corporativo dominado por el capital global. Esto tampoco se entiende como cuestión agraria o de desarrollo; es una cuestión de economía política agraria.
- vi) La formación de una gran masa de campesinos empobrecidos, forzados a abandonar la agricultura y tomar dos “caminos de salida de la pobreza rural”, según el Banco Mundial: la migración o el trabajo. Es un camino pavimentado por la cooperación internacional (Estados Unidos, Canadá, Holanda...) para ayudar a los “pobres del campo” a abandonar la agricultura e ir a la ciudad u otros países en busca de una vida mejor en el mundo moderno. El informe anual del Banco Mundial sobre la agricultura, correspondiente a 2008, es excelente para comprender su pensamiento y el de otras organizaciones de la cooperación internacional; lo que los académicos llamaron como teoría de la modernización.
- vii) Y una séptima dimensión, que es propiamente una cuestión de desarrollo rural y no de transformación agraria: lo que los sociólogos llaman la nueva ruralidad. Esta comprende:
 - 1) Una estrategia de los pobres del campo para sobrevivir y ajustarse a las fuerzas del cambio —industrialización, modernización y globalización— liberadas por el desarrollo capitalista. Esta estrategia para diversificar las fuentes de ingreso familiar (agricultura, trabajo, remesas, proyectos micro de desarrollo local y las transferencias directas del gobierno) evita que miles se marchen del campo y la agricultura, pero sin ser productores.
 - 2) Una estrategia de “desarrollo rural”, perseguida por el Estado con la cooperación internacional, y de “participación social” (“participación popular”, en el caso de Bolivia). Es lo que se conoce como “desarrollo local y co-

munitario”: una práctica muy divulgada en Bolivia como “otra manera de hacer política” (por una izquierda social, no política). Es decir, promover el cambio sin tomar el poder.

Hasta el 95, la cooperación internacional tenía la estrategia de ayudar al pobre del campo a que se vaya a la ciudad o migre buscando trabajo, y que el Estado lo capacite para que ingrese al mercado laboral moderno. Pero después de ese año asumieron que la capacidad de absorción de esta masa excedente de trabajadores rurales había llegado a su límite debido a la falta de industria y de generación de empleos en el sector público (por las privatizaciones). Entonces, la problemática de la cooperación internacional fue cómo ralentizar las migraciones y crear las condiciones para que los pobres se queden en el campo. La solución fue el desarrollo local y comunitario para empoderarlos y que así actúen por sí mismos: que no recurran al Estado ni al mercado, sino que con su capital social propio busquen cómo mejorar su vida para quedarse allá. Fue la estrategia del Banco Mundial y la cooperación internacional.

Este proceso de transformación resultó teóricamente en la “desaparición” o “el fin” del campesinado. Véase el gran debate de los años 70 sobre el tema entre Bartra, Esteva y otros, y la renovada discusión a raíz del libro de Gerardo Otero, en México, sobre la desaparición del campesinado en los tiempos del modelo neoliberal, desde los años 80 hasta ahora (pese al declive del modelo, particularmente en Sudamérica a consecuencia de los levantamientos y movilizaciones sociales de los años 90). La pregunta es: ¿El desarrollo capitalista conduce inexorablemente a la desaparición de los campesinos? ¿Hay un lugar en el mundo para el campesinado?

La cuestión agraria ahora

Ahora, veamos la cuestión agraria en la actualidad; de hecho hay varias cuestiones en el contexto de la nueva geopolítica del capital en América Latina.

En tiempos anteriores, el desarrollo capitalista de las fuerzas de producción en la agricultura resultó en un proceso de proletarización que tendió a poner fin al campesinado. Pero en la actualidad, dentro de una nueva fase del sistema —el capitalismo extractivo—, vemos condiciones de formación de un semiproletariado: un proletariado a medias, con un pie en el campo y otro pie en la ciudad, compuesto en el campo por trabajadores sin tierra, y en la ciudad, por una nueva clase de trabajadores informales que laboran por su cuenta en vez de intercambiar su poder de trabajo por un salario.

En este contexto podemos ver lo siguiente:

i) Por falta de dinamismo en el sector industrial el sistema enfrenta grandes dificultades para absorber mano de obra excedente rural que se genera en este proceso. Por eso se forma una masa de población flotante, un ejército de reserva.

Esto fue teorizado, no solo por los marxistas, sino también por los teóricos de la modernización como una ley: que el desarrollo del capitalismo depende de la explotación de una fuerza de trabajo rural excedente e ilimitada (“unlimited supply of surplus rural labour”).

Como sabemos, la formación de un proletariado industrial, teorizada por los marxistas, no sucedió; fue una concepción errada. Desde los años 80, la posibilidad

de formación de esta clase fue cada vez menor y no tuvo relevancia para el capitalismo que en esa década se formó en Latinoamérica: en la periferia del sistema, en el contexto del nuevo orden mundial. Y también para los teóricos de la modernización, como Arthur Lewis, que decían que el desarrollo económico capitalista depende de esa ilimitada oferta de fuerza laboral barata para la industrialización. Eso se ve en la China, pero en América Latina, no.

Ojo, que por cinco décadas (1950 a 2000) eso fue lo que hizo funcionar al sistema capitalista y fue la base del proceso de acumulación de capital y crecimiento económico: la oferta ilimitada de trabajo rural. Tenemos que admitir que durante ese tiempo, el proceso resultó en una gran expansión de la fuerza de producción, en transformaciones grandes y en una distribución [de riqueza] que si bien no fue equitativa derivó en condiciones de desarrollo económico y social para una gran parte de la población. Este capitalismo fue muy funcional durante tres décadas, pero desde los años 80 se eliminó al Estado como actor del desarrollo con el Consenso de Washington, que puso al sector privado al frente de la economía.

Algunos rasgos del retorno al capitalismo decimonónico

Hoy en día, hemos vuelto al capitalismo del siglo XIX que funciona no tanto con base en la explotación del trabajo, sino en la explotación y extracción de recursos naturales. Es otra forma de capitalismo mucho más contradictoria que la anterior (sus contradicciones se verifican en el concepto de la “maldición de los recursos”).

Es muy probable que este nuevo tipo de capitalismo extractivo no tenga los mismos resultados, porque no utiliza mucho trabajo y es intensivo en tecnología y capital. En décadas anteriores, la clase trabajadora participaba en 40 a 60% del producto social, pero ahora, con el capital extractivo el trabajo participa en menos del 10%. Entonces, tenemos una economía de enclave con muy pocos impactos positivos en el desarrollo social de otros sectores. Mientras la pretensión del Estado postneoliberal es promover un desarrollo inclusivo, esta forma de capitalismo es muy excluyente.

ii) También podemos ver la incapacidad o, más bien, la falta de interés del capital en asumir los costos de reproducción de la fuerza de trabajo en la agricultura (para subsumir el trabajo en el sector agrícola, como se ha hecho en los otros sectores de la economía).

Por lo tanto, el capital prefiere no tomar el control directo del proceso de producción en la agricultura, sino contratar a los productores, acumulando capital en la industrialización del producto (el agronegocio) y el proceso de circulación (el agrocomercio).

Cuestiones agrarias dentro de la nueva geopolítica del capital

En el contexto de lo que hemos denominado la “nueva geopolítica del capital” en la región se han formulado otras cuestiones agrarias, cada una con dinámicas muy distintas. Mencionamos cinco en particular.

La concentración de la tenencia de la tierra, con su transferencia a las empresas industriales y comerciales (la agroindustria), y la expansión en gran escala de la agricultura moderna con tecnología intensiva orientada hacia el mercado global. A esto se añade la formación de un sector de “agricultores por contrato”: los capitalistas no quieren absorber los costos de producción y de trabajo en la agricultura, y prefieren que los pequeños productores campesinos corran los riesgos y asuman los costos. Así entablan una relación de contrato: nosotros, las empresas, les

adelantamos los insumos, y el próximo año ustedes nos dan su producción a este precio.

Segunda. Una política agraria del gobierno ajustada al monocultivo y a la agroindustria. Es decir, producción para el mercado mundial dentro de un régimen alimentario corporativo, con un [impacto] negativo sobre la economía campesina y la producción familiar, lo que afecta a la soberanía alimentaria y a las posibilidades de contar con otro modelo más ecológico.

La tercera cuestión agraria tiene que ver ahora con el acaparamiento de la tierra (y agua); lo que la FAO y el BM describen como la inversión extranjera directa en gran escala para la adquisición de tierra y agua. Hay un gran debate sobre cuál es el objetivo de ciertos países como China que en lugar de comprar productos e importarlos prefieren comprar tierras y producir para sí mismos. El acaparamiento en gran parte deriva en la conversión de la tierra para la producción de biocombustibles para el mercado global: producir energía en vez de alimentos, porque la demanda de energía es más grande en el mercado mundial.

La cuarta dimensión es lo que los teóricos denominan como un nuevo *cerco al bien común* —tierra, agua y recursos naturales— facilitado con una política neoliberal de privatización y mercantilización, y con el desarrollo por el capital extractivo de las fuerzas de producción.

Y, finalmente, una cuestión política más que agraria, pero en todo caso, una dimensión muy importante en el análisis de la transformación agraria: la generación y movilización de fuerzas de resistencia a este tipo de capitalismo extractivo y a sus proyectos de impacto negativo. Todo tipo de capitalismo y de desarrollo genera conflictos sociales, pero ahora tenemos nuevas formas de conflicto en la frontera del capital extractivo que otra vez está en el campo, en los enclaves. Es una lucha para asegurar la soberanía alimentaria, la agroecología, la viabilidad de la producción pequeña para mercados locales y la sustentabilidad del modo de vivir de las comunidades y de los pobladores del campo.

Esto lo podemos ver como una lucha de clases en las condiciones actuales del capitalismo (ya no las luchas grandes y largas del siglo XX por la tierra y por mejorar salarios y condiciones de trabajo).

No entraré en detalles sobre esta lucha; para comprenderla mejor, leeré un discurso que la define. Es de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en una reunión en Quito: “No a la mercantilización de la vida, alimentos y agua, y sus impactos sociales y ambientales por los capitales de las industrias extractivas (minería, hidrocarburos, madera); alimentarios (transgénicos, semillas, agrocombustibles); y privatizadores del agua y biodiversidad (biopiratería).

Creo que este discurso describe esta problemática mejor que los académicos porque quienes lo pronuncian viven la realidad y la saben describir; saben por qué están luchando.

Debate

El poder político está con el capital

Primero, creo que es necesario caracterizar lo que usted denomina como gobiernos postneoliberales, que serían Bolivia y Ecuador. Ese término ni siquiera es retórico, es demagógico: tanto del gobierno de Correa, como del de Evo Morales. En los términos que usted ha planteado, es el capitalismo extractivista lo que ideológica y políticamente caracteriza a estos dos regímenes. A eso hay una característica que convendría que usted añada: depredadores inmisericordes de la Madre Naturaleza, aunque ambos gobiernos la usen como parte de su discurso.

Dos. (...) Creo que es importante insistir en que las transnacionales son las que verdaderamente ejercen el poder en Bolivia y en Ecuador. Aquí hubo un supuesto proceso de nacionalización. La agenda de octubre en Bolivia decía “fuera transnacionales”, pero ninguna se ha ido. Son las que ejercen el poder, no los llamados movimientos sociales, que solamente son tropas de apoyo electoral del gobierno.

Tercero. Usted ha nombrado a Ecuador y Bolivia, pero no se puede prescindir, en el análisis del capitalismo extractivista, de la situación de Chile, es decir, la lucha heroica del pueblo mapuche contra la agresión de las empresas papeleras transnacionales, que depredan y deforestan los territorios indígenas (...).

Y cuarto. Cuando hablé de la resistencia de los pueblos me llama mucho la atención que no haya nombrado la lucha de los pueblos del TIPNIS. El núcleo de la lucha contra el extractivismo en Bolivia está en los pueblos del TIPNIS: mojeños, chimanes y yuracarés. Es una verdadera lucha: no sólo por un sistema económico y político, sino por la vida. El capitalismo extractivo depreda la vida; es ella la que está en riesgo, no un pensamiento ni ideología... [José Luis Saavedra, Universidad Andina].

...Se están dotando reses en Beni y Pando, sin embargo, esos territorios son esencialmente forestales. Nuestro gobierno ha autorizado que se siga deforestando contra los indígenas. O sea, se está abriendo la frontera agrícola y arrinconando a nuestros indígenas. (...) Este gobierno ha autorizado que se importe y se comercialice soya transgénica, y es lo que hoy consumimos como leche, pero es cancerígena. Y, por último, quieren generar energía atómica en el departamento, cuando en países industrializados están rechazando esa energía. Tenemos que oponernos porque eso será la hecatombe, la muerte de Bolivia.

Excelentes comentarios, aunque no escuché ninguna pregunta. Algunos comentarios los dejaremos para la discusión en los siguientes paneles; por ejemplo, el asunto de la soya.

Daré respuesta a los comentarios iniciales. En cuanto al Estado postneoliberal, sí hablé más de Ecuador y Bolivia, pero en realidad hay dos tipos de postneoliberalismo,

aunque los dos plantean la necesidad de un desarrollo inclusive con base en lo que la Cepal llama como desarrollismo.

Se puede decir que Argentina, Brasil y Chile representan un tipo de postneoliberalismo más pragmático que busca funcionar mejor en el sistema capitalista. Ecuador, Bolivia y Venezuela representan otro tipo de postneoliberalismo, orientado a lo que unos llaman el socialismo del siglo XXI. Pero es muy difícil entender lo que se quiere decir con socialismo, porque socialismo para Evo no es lo mismo que en Ecuador ni en Venezuela, y está lejos del socialismo de Cuba. En todo caso, esos regímenes tienen algo en común aparte de una retórica antiimperialista: persiguen más o menos la misma política, que es combinar el nuevo desarrollismo con el nuevo extractivismo. En la práctica no veo muchas diferencias entre los dos tipos de regímenes postneoliberales.

En cuanto al comentario de que las multinacionales ejercen el poder, eso se puede discutir; es un poco complicado. Opino que por una coincidencia de intereses económicos entre los gobiernos y el capital global se entra a un acuerdo y este implica una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque para el desarrollo nacional dependen de la importación de capital: invitar a los inversionistas de afuera para extraer los recursos. Es una ideología que plantea que no tenemos capacidad para generar capital. El hecho de que se acepte un mal trato quiere decir que el Estado es mucho o algo sumiso, por su preocupación de convencer a los inversionistas. Entonces, en lugar de redistribuir los recursos adicionales para pagar mejor a los trabajadores, deja el dinero en las reservas internacionales o lo presta al Banco Mundial y a los bancos europeos, con tasas de interés del 1%. Es ridículo, una estupidez que un país que genera recursos financieros, en vez de invertirlos los tenga en las reservas para que los inversionistas lo miren bien. Esto implica una relación de dependencia y que el poder está con el capital, con las multinacionales.

En cuanto a Chile, estoy de acuerdo. No tenía tiempo de entrar en ese caso, y lo mismo para el TIPNIS. Hablé de la gran contradicción que tiene que enfrentar el gobierno, y el TINPIS es emblemático de esto. He escrito varios libros sobre la resistencia, pero no había mucho tiempo para eso.